



**NUE 234-A-2020 (RS)**

**xxxxxx contra Universidad de El Salvador -UES-**

**Resolución Definitiva**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las diez horas con cincuenta y nueve minutos del veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

**Descripción del caso**

I. El presente caso fue promovido por **xxxxxx** en contra de la resolución de referencia UAIP/RE COVID/48COVID19-2020, emitida por la oficial de información de la **Universidad de El Salvador-UES-** el 20 de noviembre del año 2020.

Al respecto, el apelante solicitó información concerniente a:

*"1) Copia del estudio técnico que realiza el Jefe(a) del Departamento de Matemática para elaborar la propuesta de asignación de la carga académica que se debe presentar a Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, dicha información debe corresponder a los periodos académicos: Ciclo I-2018; Ciclo II-2018; Ciclo I-2019; Ciclo II-2019; Ciclo I-2020; Ciclo II-2020.*

*2) Copia del estudio técnico que realiza el Director(a) de la Escuela de Economía para elaborar la propuesta de asignación de la carga académica que se debe presentar a Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, dicha información debe corresponder a los periodos académicos: Ciclo I-2018; Ciclo II-2018; Ciclo I-2019; Ciclo II-2019; Ciclo I-2020; Ciclo II-2020.*

*3) Copia del estudio técnico que realiza el Director de Escuela de Administración de Empresas para elaborar la propuesta de asignación de la carga académica que se debe presentar a Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, dicha información debe corresponder a los periodos académicos: Ciclo I-2018; Ciclo II-2018; Ciclo I-2019; Ciclo II-2019; Ciclo I-2020; Ciclo II-2020.*

*4) Copia del estudio técnico que realiza el Director(a) de la Escuela de Contaduría Pública para elaborar la propuesta de asignación de la carga académica que se debe presentar a Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, dicha información debe corresponder a los periodos académicos: Ciclo I-2018; Ciclo II-2018; Ciclo I-2019; Ciclo II-2019; Ciclo I-2020; Ciclo;II-2020.*

*5) Copia del estudio técnico que realiza el Director(a) de la Escuela de Mercadeo Internacional para elaborar la propuesta de asignación de la carga académica que se debe presentar a Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, dicha información debe corresponder a los periodos académicos: Ciclo I-2018; Ciclo II-2018; Ciclo I-2019; Ciclo II-2019; Ciclo I-2020; Ciclo II-2020”.*

Ante dicha solicitud, la Oficial de Información de la **UES** resolvió: entregar oficio de respuesta remitido por la Facultad de Ciencias Económicas. No obstante, el recurrente manifestó su inconformidad, señalando -en lo medular- que la información solicitada ha sido declarada como inexistente, sin cumplir con las debidas diligencias que establece el artículo 73 de la LAIP. Asimismo, indicó que el artículo 18 letra f y el artículo 25 letra g del Reglamento General de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, establece que es atribución y deber de los directores de la escuela y de los jefes de departamento, proponer a Junta Directiva la asignación de carga académica, por lo menos ocho días antes del inicio de cada ciclo académico.

**II.** El Instituto admitió la apelación y designó a la Comisionada **Roxana Soriano Acevedo** para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución. De igual forma, en plena observancia y respeto al Derecho de Defensa y Audiencia que debe imperar en todo procedimiento administrativo, de conformidad con el Art. 88 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), se le corrió traslado a la **UES** para que rindiera su informe justificativo.

En dicho informe, el ente obligado manifestó -en lo medular- los pasos seguidos por el oficial de información durante la tramitación del proceso de apelación por parte del ciudadano **xxxxx**. De igual forma, se señala que se solicitó informe al señor Nixon Rogelio Hernández Vásquez, quien es el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas con relación a la información que fue solicitada por el apelante, manifestando que la misma es de carácter

inexistente, ya que el tema de la carga académica se realiza con base al Art. 38 de la Ley de Educación Superior. En consecuencia, ratificaron todo lo actuado por la oficial de información, señalando que se hicieron las consultas respectivas con las unidades encargadas, indicando que la información solicitada por la peticionaria es inexistente en dicha institución.

**III.** El día 9 de marzo del corriente año se llevó a cabo la audiencia oral con la comparecencia únicamente del apoderado especial del ente obligado, **xxxxx**.

En la fase de alegatos, la representación de la **UES** expuso -en lo medular- que no se cuenta con ese estudio técnico, puesto que los Directores de Escuela y Jefes de Departamento elaboran dicha propuesta con base a su experiencia, conocimientos y destrezas, de conformidad con la Ley de Educación Superior (Art. 38), la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador (Art. 32), y el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador (Art. 50). Asimismo, cuando el ciudadano mostró inconformidad con la respuesta brindada por la Oficial de Información de dicho ente obligado, se solicitó a la Facultad de Ciencias Económicas que se realizara una búsqueda para que se confirmara la inexistencia de la misma; a lo cual se envió respuesta por parte de la encargada de la Unidad de Gestión Documental y Archivos y del Vicedecano de dicha facultad, en la cual manifestaron que la misma es de carácter inexistente ya que no se genera esa información.

### **Análisis del caso**

Previo a iniciar el presente análisis del caso, este Instituto tiene a bien indicar que el acceso a la información pública es un derecho constitucional implícito, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn); sin embargo, este tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión, regulado en el artículo 6 de la Cn. Asimismo, este derecho comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan *interés público*.

De igual forma, se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a la información en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

En consecuencia, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **I)** Breves consideraciones del principio de máxima divulgación, efectos; **II)** Consideraciones con respecto a la inexistencia de la información; **III)** Análisis de admisibilidad de la prueba aportada; y **IV)** Aplicación al presente caso.

**I)** Para comenzar, el principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII/O/08), “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información” del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “toda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones.

El Art. 4 letra “a” de la LAIP, establece el principio de máxima publicidad como rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones. En ese orden de ideas, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilita el acceso de la información pública a toda persona.

También, la CIDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”.

Además, se puede interpretar que los tres efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administre o se encuentre en poder de los entes obligados, son: a) El derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción; b) La carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano

que fue solicitada; y, c) Preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación.

II. Ahora bien, con relación al objeto de controversia del presente caso, la UES ha manifestado que toda la información requerida por el ciudadano apelante es de carácter inexistente, ya que dicha información no es generada en la Facultad de Ciencias Económicas de dicho ente obligado.

Al respecto, es importante mencionar que de acuerdo a lo establecido en el Art. 73 de la LAIP, cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos de la unidad administrativa correspondiente, el oficial de información tomará las medidas pertinentes para localizarla en la dependencia correspondiente, y en caso de no encontrarla, expedirá una resolución que confirme su inexistencia.

El propósito de la resolución es que dicho servidor emita una declaratoria en la cual confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, garantizando que efectivamente se **realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información** de su interés y que las mismas fueron las adecuadas para atender a la particularidad en concreto; es decir, dar certeza al solicitante del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada.

En acotación a lo anterior, es atinente señalar que la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la autoridad, es decir, se trata de una cuestión de hecho, no obstante que la dependencia o autoridad cuente con las facultades para poseer dicha información. Asimismo, este Instituto ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: *a) nunca se haya generado el documento respectivo; b) el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero, se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y, c) la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si esta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria.* Sin embargo, dichos extremos no han sido demostrados en el caso sub judice.

De igual forma, este Instituto, ha emitido resoluciones con base a los criterios de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), y en relación a la inexistencia de la

información ha establecido que: “se deberá comprobar y motivar que la información solicitada no existe, y para ello, se tiene que acreditar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos materiales y digitales, según corresponda; consignando los requisitos que den certeza de que la búsqueda fue realizada de manera minuciosa, tales como: i) que se hizo llegar la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información requerida, con el propósito de que, en su caso la localizaran y manifestaran si se encontraba disponible; ii) que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas fueron las adecuadas para atender el caso concreto; iii) que el criterio de búsqueda utilizado fue el adecuado: amplio y extensivo (es decir, no restrictivo); iv) que de la búsqueda efectuada no se localizaron documentos o información que den cuenta de lo solicitado; y, v) la precisión, en su caso de que se procedió a la destrucción de la información por cuestiones de la vida útil, en los términos de la ley de que se trate. Cuando posterior al análisis de la inexistencia de la información, se determine que la misma debería de existir en virtud de que deriva del ejercicio de facultades, competencias o atribuciones de la autoridad (ente obligado) ésta deberá generarse o reponerse en los casos que sea posible”.

**III.** Para el presente caso, en el informe de ley presentado por la UES se ofreció como prueba documental: notas presentadas xxxxx, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UES, y, de xxxxx, quien es la encargada de la Unidad de Gestión Documental y Archivo de esa misma entidad (folios 18 al 26 del presente expediente), donde se indica que la información solicitada es inexistente, y que se ha verificado que no se cuenta dentro de los archivos de dicho ente.

En este sentido, las pruebas aportadas deben instruir los hechos en disputa y proveer de conocimiento a este Instituto, para que administre con mayor acierto la justicia y emita un pronunciamiento apegado a la ley y a los hechos probados.

El principio de contradicción de la prueba, según el artículo 4 y 312 del CPCM, indica que las partes en un proceso tienen el derecho de aportar pruebas, en igualdad de condiciones, utilizando los medios que posibiliten comprobar los hechos alegados. Esto significa, el aporte de pruebas idóneas y pertinentes para justificar sus argumentos las cuales deben revestir de las formalidades y requisitos establecidos en leyes respectivas.

En ese contexto, el Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), de aplicación supletoria en el presente procedimiento conforme al artículo 102 de la LAIP, contempla dos extremos que deben cumplirse para la admisión de la prueba presentada por las partes: la pertinencia y la utilidad.

En cuanto a la pertinencia, el artículo 318 del CPCM, establece que no debe admitirse ninguna prueba que no guarde relación con el objeto del proceso; por otro lado, en lo relativo a la utilidad, el artículo 319 del mismo cuerpo normativo, contempla que no deberá admitirse aquella prueba que, según las reglas y criterios razonables, no sea idónea o resulte superflua para comprobar los hechos controvertidos.

Dicho lo anterior, dado que la documentación tiene relación con la información solicitada en el presente caso, ya que versan sobre la búsqueda de la información solicitada, este Instituto considera admitir dicha prueba en su totalidad, por considerarla pertinente con base a las disposiciones citadas anteriormente.

**IV.** Dicho lo anterior, cabe mencionar que la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información, debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada, pues con ello se alcanza un mayor grado de seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues al estar la misma en control del Estado, debe evitarse al máximo el actuar discrecional de este al momento de establecer las restricciones.

En este sentido, de la prueba aportada por el ente obligado, este Instituto ha logrado verificar que la facultad de Ciencias Económicas de la UES realizó las diligencias de búsqueda, pero únicamente en la Unidad de Gestión Documental y Archivos y en el Decanato de dicha facultad, dejando de lado otros departamentos o unidades que pudieran tener la información requerida por el ciudadano, como por ejemplo el Departamento de Matemáticas, la Escuela de Economía, la Escuela de Administración de Empresas, la Escuela de Contaduría Pública y la Escuela de Mercadeo Internacional, pertenecientes a la mencionada facultad y respecto de las cual el ciudadano había requerido la información.

Ahora bien, retomando las normativas y disposiciones citadas por el ente obligado (Art. 38 de la Ley de Educación Superior; Art. 32 la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador; y el Art. 50 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador), si bien ha quedado demostrado que no existe una obligación legal de realizar un

estudio técnico de las cargas académicas a cada uno de los departamentos y escuelas que conforman la Facultad de Ciencias Económicas de la UES, sino la de únicamente presentar la propuesta, no inhibe a que lo solicitado pudo haber sido generado por cada una de las dependencias mencionadas que conforman dicha facultad, en alguno de los periodos solicitados por el ciudadano.

Así las cosas, no solo basta con argumentar que la información es inexistente o entregar al peticionario la respuesta dada por algunas las unidades que pudieran contener la información, sino que se tiene que realizar una búsqueda amplia y exhaustiva de los requerimientos de información, en todas las unidades correspondientes que pudieran tener la información en comento, motivando las razones por las cuales no se cuenta con dicha información. De igual manera, todos los actos deben ser debidamente documentados para que, el oficial de información tenga la motivación suficiente para emitir una declaratoria de inexistencia de la información.

Por lo tanto y en aras de garantizar el derecho de acceso a la información pública del peticionario, al observar que no se han realizado las gestiones pertinentes con base a los criterios de la RTA mencionados anteriormente; y en aras de garantizar el derecho de acceso a la información pública del ciudadano (Art. 2 de la LAIP) este Instituto considera procedente revocar la resolución de la oficial de información de la UES y ordenar a ese ente obligado a que, en un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, realice una nueva búsqueda más exhaustiva de la información relacionada a: *"1) Copia del estudio técnico que realiza el Jefe(a) del Departamento de Matemática para elaborar la propuesta de asignación de la carga académica que se debe presentar a Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, dicha información debe corresponder a los periodos académicos: Ciclo I-2018; Ciclo II-2018; Ciclo I-2019; Ciclo II-2019; Ciclo I-2020; Ciclo II-2020. 2) Copia del estudio técnico que realiza el Director(a) de la Escuela de Economía para elaborar la propuesta de asignación de la carga académica que se debe presentar a Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, dicha información debe corresponder a los periodos académicos: Ciclo I-2018; Ciclo II-2018; Ciclo I-2019; Ciclo II-2019; Ciclo I-2020; Ciclo II-2020. 3) Copia del estudio técnico que realiza el Director de Escuela de Administración de Empresas para elaborar la propuesta de asignación de la carga académica que se debe presentar a Junta Directiva de la Facultad de*



*Ciencias Económicas, dicha información debe corresponder a los periodos académicos: Ciclo I-2018; Ciclo II-2018; Ciclo I-2019; Ciclo II-2019; Ciclo I-2020; Ciclo II-2020. 4) Copia del estudio técnico que realiza el Director(a) de la Escuela de Contaduría Pública para elaborar la propuesta de asignación de la carga académica que se debe presentar a Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, dicha información debe corresponder a los periodos académicos: Ciclo I-2018; Ciclo II-2018; Ciclo I-2019; Ciclo II-2019; Ciclo I-2020; Ciclo; II-2020. 5) Copia del estudio técnico que realiza el Director(a) de la Escuela de Mercadeo Internacional para elaborar la propuesta de asignación de la carga académica que se debe presentar a Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, dicha información debe corresponder a los periodos académicos: Ciclo I-2018; Ciclo II-2018; Ciclo I-2019; Ciclo II-2019; Ciclo I-2020; Ciclo II-2020”.*

Luego de realizada la búsqueda, de concluir que la información no existe porque nunca se ha generado y no está en poder de las demás unidades que conforman la Facultad de Ciencias Económicas de la UES, u otras dependencias de dicho ente obligado que pudieran tener dicha información, resulta oportuno señalar a la oficial de información que se apegue a lo dispuesto en el Art. 73 de la LAIP y emita declaratoria de inexistencia de la información, a fin que el peticionario conozca los motivos de inexistencia y así se satisfaga su derecho de acceso a la información pública.

### **Decisión del caso**

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, y con base en las disposiciones legales citadas y en los Arts. 2, 6, 18 y 85 y 86 de la Cn., y 94, 96 letra d y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve:**

**a) Modificar** la resolución de referencia UAIP/RE COVID/48COVID19-2020, emitida por la oficial de información de la **Universidad de El Salvador-UES-**, de fecha 20 de noviembre del año 2020.

**b) Ordenar** al titular o máxima autoridad de la **Universidad de El Salvador** que, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la información, gire instrucciones a su oficial de información y oficial de gestión documental y archivos, a efecto de realizar lo siguiente: una nueva búsqueda de la información relacionada a: *"1) Copia del estudio técnico que realiza el Jefe(a) del Departamento de Matemática para*

*elaborar la propuesta de asignación de la carga académica que se debe presentar a Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, dicha información debe corresponder a los periodos académicos: Ciclo I-2018; Ciclo II-2018; Ciclo I-2019; Ciclo II-2019; Ciclo I-2020; Ciclo II-2020. 2) Copia del estudio técnico que realiza el Director(a) de la Escuela de Economía para elaborar la propuesta de asignación de la carga académica que se debe presentar a Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, dicha información debe corresponder a los periodos académicos: Ciclo I-2018; Ciclo II-2018; Ciclo I-2019; Ciclo II-2019; Ciclo I-2020; Ciclo II-2020. 3) Copia del estudio técnico que realiza el Director de Escuela de Administración de Empresas para elaborar la propuesta de asignación de la carga académica que se debe presentar a Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, dicha información debe corresponder a los periodos académicos: Ciclo I-2018; Ciclo II-2018; Ciclo I-2019; Ciclo II-2019; Ciclo I-2020; Ciclo II-2020. 4) Copia del estudio técnico que realiza el Director(a) de la Escuela de Contaduría Pública para elaborar la propuesta de asignación de la carga académica que se debe presentar a Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, dicha información debe corresponder a los periodos académicos: Ciclo I-2018; Ciclo II-2018; Ciclo I-2019; Ciclo II-2019; Ciclo I-2020; Ciclo II-2020. 5) Copia del estudio técnico que realiza el Director(a) de la Escuela de Mercadeo Internacional para elaborar la propuesta de asignación de la carga académica que se debe presentar a Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, dicha información debe corresponder a los periodos académicos: Ciclo I-2018; Ciclo II-2018; Ciclo I-2019; Ciclo II-2019; Ciclo I-2020; Ciclo II-2020". Dicha búsqueda deberá efectuarse en todas las unidades administrativas o escuelas de la Facultad de Ciencias Económicas que pudiesen tener la información solicitada, documentando el procedimiento seguido. En caso de no encontrarse la información en controversia, se deberá declarar su inexistencia y entregar al apelante la respectiva declaratoria de inexistencia y la documentación que la respalde.*

**c) Ordenar** a la UES que, en el plazo de dos días hábiles contados a partir del siguiente al vencimiento del plazo otorgado en el literal anterior, entregue a **xxxxx**, la información solicitada; y en el caso de no encontrarla, deberá entregar la declaratoria de inexistencia junto con todas las diligencias de búsqueda en el mismo plazo mencionado en este literal.

**d) Ordenar** a la UES que, por medio de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo mencionado en el literal “c)” de esta parte resolutive, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de lo ordenado por este Instituto en la presente resolución, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

**e) Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

**f) Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.

**g) Publíquese** esta resolución oportunamente.

*Notifíquese.-*

-----D.H.S-----AGREGORI-----ILEGIBLE-----  
-PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA  
SUSCRIBEN"RUBRICADA"